

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la comisión de Educación, **relativa a la garantía del derecho a la escolarización en la Escuela Pública.**

Exposición de motivos

La Constitución Española, en su artículo 27 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la educación. Desde su aprobación en 1978, no fue hasta 1985 cuando entró en vigor la primera Ley de Educación de la democracia. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), aprobada ahora hace 31 años, estableció una triple red de centros educativos: públicos, privados y concertados.

El motivo de generar un sistema de educación privada que se financiara directamente con fondos públicos fue garantizar el derecho a la educación básica a toda la población, ante la inexistencia de una red de centros públicos lo suficientemente implantada para asegurar la oferta de plazas necesarias. Dicha situación, que en sí misma tenía carácter de transitoriedad, se ha convertido por el contrario en una realidad consolidada desde entonces.

Tanto es así que, de toda la inversión pública en educación que realizan el Estado y las Comunidades Autónomas, un 14,2% de ésta se destina a financiar la enseñanza privada concertada, llegando a suponer 5.705,8 millones en el año 2012.

Sólo en el período de 2002 a 2012 el presupuesto que las administraciones destinaban a la enseñanza privada concertada se incrementó en un 62,8%.

Estos datos ponen de manifiesto que existe una clara tendencia de apuesta por la educación concertada como modelo de gestión de los centros docentes, frente a la inversión para la construcción de centros públicos y la oferta de nuevas plazas.

Estos datos contrastan precisamente con las políticas de recortes a la escuela pública que se han aprobado tanto desde el Gobierno central como desde algunas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.

En algunas Comunidades como en Madrid se han llegado a producir situaciones de cierre de aulas e incluso centros entero de la enseñanza pública, mientras se sigue financiando la enseñanza concertada. Con este tipo de prácticas se acaban generando efectos que segregan al alumnado en función del nivel socioeconómico y sociocultural de sus familias. Se da la situación paradójica de que acaban siendo los centros los que eligen a las familias, y no las familias las que eligen los centros escolares para sus hijos.

En el curso 2013/2014, el 68,2% de la población general de estudiantes se encuentran escolarizados en el sistema público de enseñanza no universitaria, frente al 25,5% de la concertada. En cambio, entre la población inmigrante, la población escolarizada en la escuela pública representa el 82,2%, frente al 13,1% de este colectivo que acude a la

enseñanza concertada. Es significativa también la diferencia en la escolarización del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, que tiende a concentrarse en la Escuela Pública, generando dinámicas de exclusión entre los centros de la red pública y la concertada/privada.

Este modelo de gestión existe en otros países de nuestro entorno, aunque si miramos a Finlandia, país referente en cuanto a calidad y resultados educativos, la enseñanza concertada sólo supone el 2,6% del total de todo el sistema educativo, siendo más del 90% de los centros de titularidad y gestión pública.

Es por ello posible afirmar que sólo apostando por una educación pública de calidad puede garantizarse la equidad, asegurando una enseñanza de calidad para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones socioeconómicas.

Por todo ello se presenta la siguiente:

Proposición no de ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a»

Alcanzar, en el marco de la Conferencia Sectorial, un Acuerdo entre las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas que permita garantizar el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos e hijas en la Escuela Pública:

1. Impidiendo el cierre de aulas y centros públicos cuando baje la población escolar y mientras haya unidades concertadas en la misma zona escolar
2. Distribuyendo de forma equilibrada la escolarización de Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en los colegios públicos y privados concertados.
3. Ofreciendo la mayor oferta posible de plazas en centros públicos, considerando la máxima capacidad real para albergar alumnado en cada uno de ellos.
4. Estableciendo los mecanismos oportunos a través de la Inspección Educativa para que no se efectúe ningún tipo de cobro a las familias que escolarizan a sus hijos e hijas en centros sostenidos con fondos públicos.

Congreso de los Diputados, Madrid, 2 de marzo de 2016

Irene Montero Gil
Diputada del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea

Ione Belarra Urteaga
Diputada del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea

Juan Manuel Del Olmo Ibañez
Diputada del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea

Joan Mena Arca
Diputada del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea

Rosa Ana Alonso Clusa
Diputada del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea

Javier Sánchez Serna
Diputada del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea

Belén Guerra Mansito
Diputada del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea

David Bruzos Higuero
Diputada del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea

Iñigo Errejón Galván
Portavoz Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea